

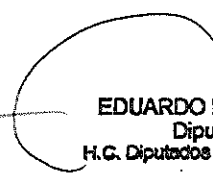


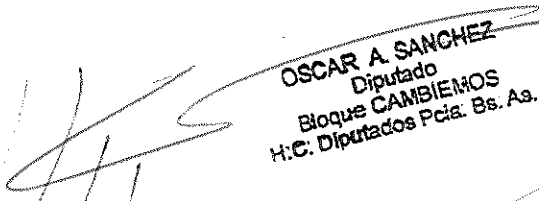
PROYECTO DE DECLARACIÓN

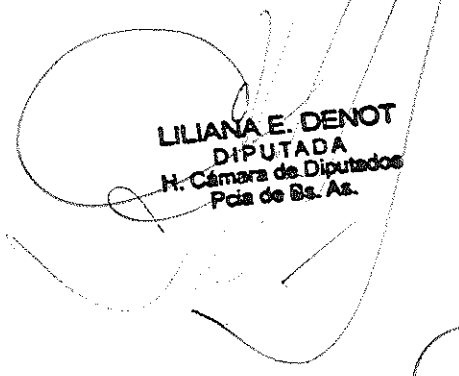
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

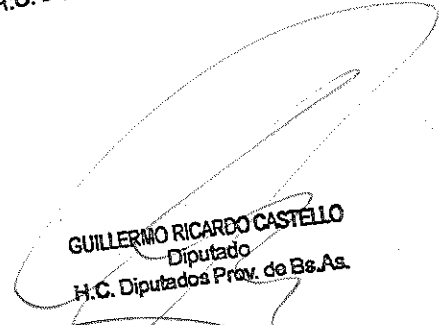
DECLARA

Su beneplácito y felicitaciones al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por resolver sus diferencias políticas por medio del procedimiento constitucional de Referendo Revocatorio cuyo impulso tiene como objeto alcanzar una solución democrática y pacífica a la gravísima crisis institucional, social y económica que atraviesa ese país latinoamericano.


EDUARDO BARRAGAN
Diputado
H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.

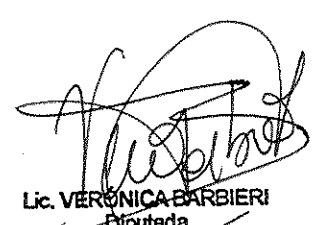

OSCAR A. SANCHEZ
Diputado
Bloque CAMBIEMOS
H.C. Diputados Pcia. Bs. As.

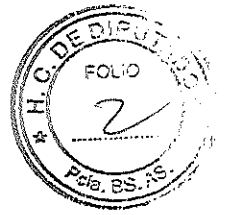

LILIANA E. DENOT
DIPUTADA
H. Cámara de Diputados
Pcia de Bs. As.


GUILLERMO RICARDO CASTELLO
Diputado
H.C. Diputados Prov. de Bs.As.


Dra. M. ALEJANDRA LORDEN
Diputada
H. Cámara de Diputados Pcia. Bs. As.


Dra. SANDRA S. PARIS
Diputada
Bloque CAMBIEMOS
H.C. Diputados Pcia. Bs. As.


Lic. VERÓNICA BARBIERI
Diputada
Bloque Cambiemos Buenos Aires
H.C. Diputados Prov. de Bs.As.



FUNDAMENTOS

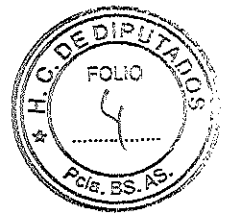
La República Bolivariana de Venezuela está atravesando una de las crisis institucionales y socio económicas más preocupantes de toda su historia. Las tasas de inflación se han disparado y el gobierno, francamente desorientado, no encuentra las herramientas adecuadas para la recuperación de la economía. Años de intervencionismo, expropiación de empresas privadas, control de precios, corrupción endémica, han puesto a este país latinoamericano al borde del colapso económico. Recordemos que Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del continente y la renta petrolera que recibió el estado en estos últimos años fue millonaria.

En la actualidad, los venezolanos viven una realidad angustiante, en la que el acceso a los alimentos básicos es una tarea casi imposible. El 75% de las familias son pobres y un 25% vive por debajo de la línea de pobreza. Como el precio de los alimentos que conforman la canasta básica está regulado por el gobierno, para poder adquirirlos, los ciudadanos deben esperar durante horas en las colas que se forman en las puertas de las cadenas de supermercados y almacenes estatales que se encargan de la distribución y comercialización de los productos. El desabastecimiento de alimentos básicos ronda el 80% de los supermercados y 40% de los hogares. Es de destacar que en los últimos años se ha destinado más de 142.000 mil millones de dólares en políticas alimentarias por lo que este escenario es prácticamente inentendible. Los expertos en políticas públicas de salud declararon que la mortalidad infantil en Venezuela es 4 veces más alta que en otros países de América Latina.

Una de las consecuencias de la crisis económica se ve reflejada en el crecimiento de las tasas de inseguridad que han colocado a Venezuela entre los países más inseguros de América del Sur. Las cifras son alarmantes, más de 200.000 homicidios en los últimos 15 años. El crimen organizado ha infiltrado las fuerzas de seguridad ya que el contrabando y el narcotráfico se han convertido en una importante fuente de ingresos para la cúpula política y militar.

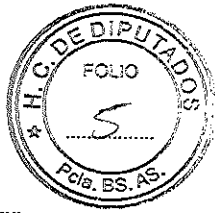
A lo mencionado anteriormente debemos agregar el estado de deterioro de la salud pública. La escasez de medicamentos y de insumos médicos obligó a La Asamblea Nacional -de mayoría opositora- a declarar, a principios del año, una crisis humanitaria de salud. Según datos de consultoras privadas, en ocho de cada diez farmacias no se encuentran los medicamentos básicos. Por otra parte, el tratamiento de enfermedades de alta complejidad como el cáncer o afecciones cardiovasculares es prácticamente imposible por la falta de una adecuada infraestructura hospitalaria en el país.

Ante el estrepitoso fracaso de las políticas económicas implementadas, las actuales autoridades deberían haber convocado a la dirigencia política, sin distinciones partidarias, a una mesa de concertación y debate, para alcanzar una salida ordenada al caos imperante. Por el contrario, el régimen chavista optó por encerrarse en sí mismo exacerbando su veta autoritaria, que se ve reflejada en la existencia de más de 100 presos políticos detenidos en las cárceles del país. Con el fin de silenciar la disidencia interna y las manifestaciones de descontento popular se ha adoptado como política pública la militarización de la sociedad al sancionarse, por ejemplo, la ley de registro militar obligatorio para las personas entre los 18 y 60 años de edad, imponiendo sanciones a quienes no se inscriban tales como: la



imposibilidad de ser contratados por organismos públicos o privados, ni obtener la licencia de conducir o títulos universitarios, en flagrante violación de preceptos constitucionales. Esta iniciativa se suma a programas como la creación de las Milicias Obreras destinadas a intimidar y atacar a los trabajadores que se organizan para reivindicar sus derechos, o los “cuerpos combatientes” conformados por civiles que prestan funciones dentro de las instituciones públicas del Estado. Es claro que el gobierno ha puesto su futuro en manos de las cúpulas militares las que han visto incrementar su poder en la toma de decisiones, actuando como garantes del régimen y en definitiva cómplices de las innumerables arbitrariedades gubernamentales que padecen los ciudadanos.

Frente a este panorama de desolación y de falta de diálogo del régimen, la Mesa de la Unidad Democrática –MUD- coalición que nuclea a los distintos partidos políticos que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro ha impulsado, a fin de abrir paso a la transición democrática, un referendo revocatorio para decidir la permanencia del primer mandatario en la jefatura del Estado. Pese a las infundadas objeciones que el Tribunal Supremo de Justicia –de mayoría oficialista- ha efectuado al proceso, la oposición ha superado la primera etapa de recolección de firmas del 1% de los electores de los 24 estados del país. Ahora, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela está obligado a fijar fecha para dar inicio a la segunda fase del procedimiento en la que se deben juntar las firmas del 20% del padrón electoral. No obstante la dificultad que implica la tarea a cumplir, la dirigencia opositora tiene la certeza que la única salida pacífica a la grave crisis que atraviesa Venezuela es la convocatoria a los ciudadanos para que decidan sobre la continuidad del actual mandatario. Estoy convencido que el pueblo venezolano puede y debe



expresar su voluntad en este sentido en un ámbito de pluralidad y respeto para avocarse, luego, sin dilaciones a retomar la senda de la consolidación democrática, el crecimiento económico y el progreso social.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.


EDUARDO BARRAGAN
Diputado
H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.